

# La incidencia de la exclusión social en los hogares con personas con discapacidad

Sagrario Anaut Bravo  
Javier Arza Porras  
M<sup>a</sup> Jesús Álvarez  
*Universidad Pública de Navarra*



**FUNDACIÓN FOESSA**  
FOMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES  
Y DE SOCIOLOGÍA APLICADA

## 1. Introducción

El Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS (2011) insiste en que la discapacidad es una cuestión de Derechos Humanos, por cuanto las personas con discapacidad experimentan situaciones de desigualdad y de violación de la dignidad, en ocasiones, por prejuicios y abusos, y tienen serias dificultades para lograr su autonomía personal. Con este enfoque de recuperación de derechos se han publicado estudios, como los Informes para España: Derechos Humanos y Discapacidad, elaborados por CERMI desde 2008. Otros trabajos, como los de Etxebarria (2008) avanzaban en su reflexión hacia el concepto de ciudadanía de las personas con discapacidad, señalando la necesidad de considerar la participación de estas personas en su vida, no sólo en aspectos asistenciales, sino en los sociales y políticos. Recientemente, Alonso (2011), Martínez Ríos (2011 y 2013) o Raya, Caparrós y Peña (2012), coinciden en mostrar la necesidad de un cambio de enfoque y paradigma hacia los Derechos Humanos, sin el cual no se podrá superar la situación recogida en el Informe de la ONU citado.

Existe un notable consenso conceptual en torno a los avances que se han producido en las últimas décadas hacia un modelo social de la discapacidad, que incluye en la manifestación de la misma, tanto las dificultades de cada individuo como la exigencia del contexto que le rodea. También se recoge esta concepción en la legislación, especialmente desde la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, como reflejan en sus trabajos el Colectivo loé (2012) y Marbán (2013). Huete (2013), por su parte, resalta una cierta mejoría en materia de sensibilización y concienciación de la sociedad sobre la discapacidad. Sin embargo, los datos de la Encuesta Social Europea (2010), que él maneja, muestran la persistencia de la situación de invisibilización de la población con discapacidad y la consiguiente experiencia de la discriminación.

Se han producido progresos en materia legislativa centrada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social<sup>1</sup> y se ha seguido la recomendación de la Convención de la ONU y de la Estrategia Europea sobre Discapacidad, 2010-2020 (2010), para elaborar y activar la Estrategia Española sobre Discapacidad (2012-2020). En ella se destacan los siguientes obstáculos a la adaptación del entorno a las personas con discapacidad: insuficiencia y limitaciones de las políticas y normas, sobre todo, en cuanto a su eficacia; las actitudes sociales negativas; financiación insuficiente; falta de participación de las personas con discapacidad; obstáculos a la información; y limitación en la accesibilidad.

Ciertamente, todos estos pasos dados hasta la fecha suponen un salto cualitativo en el desarrollo de un modelo de Derechos Humanos en materia de discapacidad. En ese proceso ha influido el trabajo realizado, desde los años ochenta del siglo pasado, en torno al concepto de ciudadanía multicultural, de ciudadanía diversa. En este nuevo concepto las personas con discapacidad plantean una diversidad más (funcional en este caso), ante la que el contexto debe responder garantizando la igualdad de oportunidades. Este modelo de comprensión será reivindicado por entidades del ámbito de la discapacidad sensorial y por el movimiento de Vida Independiente (Palacios y Romañach, 2006).

Así como se ha evolucionado hacia una concepción social del constructo “discapacidad”, hay autores que avanzan hacia una definición social de la ciudadanía, considerando que las instituciones públicas tienen el deber de garantizar, para el completo ejercicio de la ciudadanía, la igualdad de oportunidades. Este concepto implica una actuación no sólo reactiva que remueva las barreras a la participación, sino una línea de trabajo promocional que impulse las medidas necesarias para ofrecer oportunidades a las personas en función de sus necesidades.

<sup>1</sup> Destacan: Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La realidad cotidiana, por su parte, se muestra menos complaciente con las acciones adoptadas, ya que no se perciben avances tan significativos como los expuestos en cuanto a la reducción de la situación de exclusión de las personas y los hogares con algún miembro con discapacidad. En las siguientes páginas se tratará esta realidad de la exclusión a partir de la tercera Encuesta FOESSA (2013), continuando con el análisis de la evolución de los procesos de exclusión social a partir de sus diferentes ejes y dimensiones (2007-2013).

## 2. Personas con discapacidad y hogares con algún miembro con discapacidad

Según la encuesta EDAD (2008)<sup>2</sup>, el 8,5% de la población en España son personas con algún tipo de discapacidad. Se trata de un porcentaje prácticamente idéntico al recogido en la encuesta FOESSA del año 2009 (8,2%), aunque algo superior al reflejado en la encuesta del año 2013 (7,3%). Es decir, no se apunta un aumento de la representación de las personas con discapacidad en el conjunto de la sociedad a pesar del envejecimiento y sobre-envejecimiento de la población.

Un comportamiento diferente es el registrado por el porcentaje de personas con discapacidad que disponen de un certificado de la misma. Según la encuesta FOESSA de 2013, el 80% contaba con dicho certificado, frente al 60% en 2007 y el 53% en 2009. En cuanto al reconocimiento de dependencia, el porcentaje baja hasta el 40%. Estos datos reflejan un progresivo esfuerzo de las personas con discapacidad por acreditar su situación como vía para acceder a las diferentes prestaciones y recursos existentes.

En cuanto a la edad media, en la encuesta EDAD (2008) se situaba en los 64,3 años, mientras que en la población general era de 40,1 años (Colectivo Ióe, 2012). Los datos de las tres encuestas FOESSA (2007, 2009 y 2013) se refieren también a una elevada edad de esta población. Por ejemplo, en las encuestas de los años 2007 y 2009 el porcentaje de personas con discapacidad, mayores de 65 años, se situaba en torno al 50%, dato que desciende hasta el 40% en 2013.

En relación con el sexo de las personas con discapacidad, las encuestas FOESSA reflejan una proporción muy equilibrada entre hombres y mujeres, si bien con predominio femenino. Otros estudios señalan una mayor feminización de la población con discapacidad (Marbán, 2012; Huete, 2013 a; INE, 2013). Así, en la EDAD (2008), la discapacidad estaba presente en el 9,9% de las mujeres y en el 6,8% de los hombres (Colectivo Ióe, 2012).

<sup>2</sup> La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) es la tercera y última macroencuesta, hasta el momento, realizada por el INE para analizar la situación y evolución de la discapacidad en España. Fue realizada a partir de un cuestionario amplio y complejo (600 preguntas), y contó con una vasta muestra de 23.000 personas con discapacidad.

**Tabla 1. Distribución porcentual de variables demográficas de las personas con discapacidad (2007, 2009 y 2013)**

	2007	2009	2013
Personas con discapacidad respecto al total de la población	6,4	8,2	7,3
Hombres con discapacidad	46	48	49
Mujeres con discapacidad	54	52	51
Personas con discapacidad mayores de 65 años	49,2	50,2	40,5

Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

Otros datos a tener en cuenta son el nivel de estudios y de ocupación. Según la encuesta FOESSA del año 2013, la mitad de las personas con discapacidad tenían un nivel de estudios inferior al Graduado Escolar/ESO, si bien el 20% alcanzaba un nivel postobligatorio. Son resultados que señalan el menor nivel de estudios de este colectivo, aunque también está influido por el alto porcentaje de personas de más edad que lo componen, siendo un dato recurrente en investigaciones anteriores. Así, Marbán (2013), a partir de los datos de la encuesta EDAD 2008, señala que “la población con discapacidad entre los 18 y los 24 años presenta unas tasas de abandono escolar prematuro superiores al 50%” y que “el nivel de estudios alcanzado por las personas con discapacidad de 30 a 34 años es muy bajo, con apenas un 20% de niveles formativos universitarios o similares”.

Respecto a la ocupación, las personas con discapacidad de 16 a 64 años mantienen niveles muy bajos de empleo. Niveles que, según las encuestas FOESSA, han oscilado entre el 22% (2007) y el 20% (2013) respecto del total de personas con discapacidad en edad de trabajar. Mucha menos estabilidad de la situación se describe en la tasa de empleo del conjunto de la población, porque las personas ocupadas han pasado del 61,8% (2007) al 48,5% (2013), según la misma encuesta FOESSA.

Los datos del INE (2013) también recogen que la brecha en la tasa de empleo entre las personas con discapacidad y el resto de la población es muy significativa (algo más de 30 puntos). En 2010 la tasa era del 27% en las personas con discapacidad frente al 60% en el resto de la población, en tanto en 2012 del 24,5% y 57,8%, respectivamente. En coherencia con esa baja tasa de empleo, el porcentaje de personas con discapacidad que recibe algún tipo de pensión es muy elevado: prácticamente el 52%.<sup>3</sup> La importante representación de personas mayores de 65 años, entre quienes afirman tener una discapacidad, explica este porcentaje en gran medida.

Una variable que también ha sufrido algunas modificaciones es el espacio residencial. Como en las Encuestas anteriores, en la de 2013 la mayor parte de las personas con discapacidad reside en barrios en buenas condiciones, aunque el 22% lo hacen en barrios degradados o marginales (incremento de 2 puntos respecto al 2007). Asimismo, se ha observado una tendencia al incremento porcentual de personas con discapacidad que viven en ciudades con más de 100.000 habitantes (38% en 2007 y 47% en 2013), mientras se mantiene estable el porcentaje de quienes lo hacen en municipios con una población igual o inferior a 20.000 habitantes (en torno al 27%).

Respecto a los hogares en los que reside alguna persona con discapacidad, el porcentaje se ha incrementado en 3,4 puntos desde el año 2007, pasando del 14,1% al 17,6% en 2013<sup>4</sup>. Se

<sup>3</sup> No obstante, la evolución seguida respecto al periodo anterior a la crisis ha sido ligeramente descendente, al pasar del 55,1% en el año 2007 al 51,9% en el año 2013. Es una reducción de 3,2 puntos.

<sup>4</sup> Ambos porcentajes se sitúan por debajo del registrado en la encuesta EDAD (2008): 20%.

trata de hogares mononucleares en su práctica totalidad, en los que residen 2 o más personas, aunque también se detecta un relevante porcentaje de personas con discapacidad que viven solas (en torno al 16% en todas las encuestas FOESSA). De igual forma, se observa el mantenimiento de la tendencia hacia los hogares polinucleares, estrategia que podría estar hablando del reagrupamiento de algunos núcleos familiares para compartir sus recursos: 1,8% en 2007; 7,1% en 2009; y 6,5% en 2013.

Con los datos expuestos, una cuestión a tener en cuenta por su relación con el modelo social de derechos de las personas con discapacidad es la vinculación entre la discapacidad y la exclusión social y la discriminación. A partir de los datos de la Encuesta Social Europea (2010)<sup>5</sup>, Huete afirma que las personas con discapacidad sufren un situación de exclusión “en el ámbito educativo y alcanzan inferiores niveles de estudios que el resto de la población; disponen de menos oportunidades para acceder al mercado de trabajo; hacen frente a restricciones extraordinarias para participar activamente en la sociedad, y desarrollar una vida afectiva y social normalizada” (2013). Sobre este particular coinciden los trabajos de Huete (2013 a), Colectivo Ioé (2012) y Anaut (2010), entre otros.

Asimismo, la reciente Encuesta CIS-3.000 sobre percepción de la discriminación en España, recoge que la percepción de discriminación por motivo de discapacidad física o psíquica no es desdeñable, ya que la opinión de la población al respecto sitúa la discapacidad psíquica como el segundo motivo, bastante o muy frecuente, de discriminación (58,8%), detrás solo de la discriminación por origen étnico o racial (62,4%). La discapacidad física es valorada como el quinto motivo de discriminación frecuente (49,7%), siendo superado por el aspecto físico y disponer de pocos recursos económicos. Sin embargo, esta percepción no es compartida por las personas con discapacidad, según la Encuesta EDAD 2008, puesto que solo una de cada diez personas con discapacidad ha percibido discriminación por tenerla (Huete, 2013 a).

Las páginas siguientes se van a adentrar en la situación socioeconómica y política de las personas con discapacidad y los hogares en los que residen. La evolución seguida en el período 2007-2013 y el nivel de afectación de la pobreza y de las diferentes dimensiones del proceso de inclusión-exclusión social serán sus ejes vertebradores.

### **3. La incidencia de la pobreza: una estabilidad engañosa**

En nuestro anterior trabajo sobre el primer impacto de la crisis sobre los hogares con algún miembro con discapacidad se constató el fuerte impacto de la misma sobre el empleo y sobre la incidencia de la pobreza, tanto en los hogares como en cada persona (Anaut-Bravo, Álvarez, et al., 2010). Este impacto también ha sido calculado por Huete (2013) a partir de la Encuesta Social Europea (2010), donde se observa la evidencia, podemos denominarla crónica, de unos niveles medios de ingresos inferiores en los hogares donde vive alguna persona con discapacidad. Además, las diferencias de estos hogares se acrecientan en los niveles de ingresos más bajos: el 35,81 % de la población con discapacidad vive en hogares con ingresos iguales o inferiores a 900 euros, frente al 20,48 % en la población general. Asimismo, el 36,14% de la población con discapacidad reconoce dificultades para llegar a fin de mes, frente al 19,13% de la población general.

Marbán Gallego (2012) introduce ciertas concreciones al tratar la incidencia de la pobreza a partir de los datos de la EDAD (2008). El hecho de que la tasa de pobreza de las personas con discapacidad sea “casi el doble que la del resto de la población” se entiende que es efecto de

<sup>5</sup> Es un estudio comparado y longitudinal que se lleva a cabo cada dos años, en el que participan alrededor de 30 países europeos. Trata de analizar la evolución en actitudes y comportamientos de la población europea. Cuenta con una muestra de personas con discapacidad.

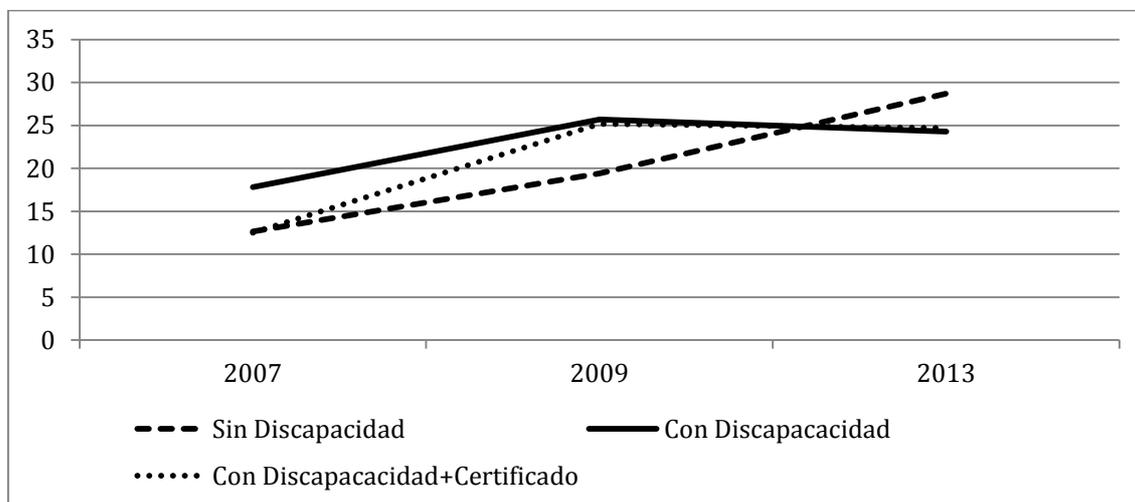
la “estructura demográfica” de este colectivo caracterizado por su envejecimiento y feminización. De esta forma, sigue el mismo autor, el ingreso “dominante en los hogares con personas con discapacidad procede de pensiones contributivas” (75%, frente al 39% de promedio en el resto de hogares). En cuanto a la feminización, Huete (2013 a) estima que el riesgo de pobreza afectaba por igual a mujeres y varones con discapacidad en 2008, si bien se detectaban diferencias en cuanto a la situación de pobreza extrema (17,3% de las mujeres y 11% de los varones) y de carencia de prestaciones (47% de mujeres y 40% de varones en 2011).

Otros autores (Benach y Muntaner, 2010; Whitehead y Dahlgren, 2006; OMS, 2011) que analizan la influencia de los determinantes sociales en la salud, sostienen que la mayor vinculación entre pobreza y discapacidad se explica por diferentes factores complementarios: el mayor riesgo que los hogares pobres tienen de padecer enfermedades y accidentes; las mayores dificultades que los hogares pobres tienen para financiar determinados tratamientos de rehabilitación; y el empobrecimiento que puede ocasionar la discapacidad por las dificultades de inserción laboral, las limitaciones de las pensiones y los gastos extra en fármacos, tratamientos y apoyos técnicos.

Con el mismo trasfondo que pone en evidencia la relación entre discapacidad y pobreza, se expresa el último Informe de Cruz Roja sobre vulnerabilidad social. En él, se reitera el importante peso del ámbito económico en esta situación. De esta premisa general, destaca la progresiva homogeneización del mapa que identifica los diversos perfiles de vulnerabilidad. Unos perfiles que, anteriormente, estaban afectados por los problemas de salud, la desestructuración familiar, las adicciones y el aislamiento social, entre otros (Malgesini, 2013), y que han dejado de mostrar contornos bien definidos.

La última Encuesta FOESSA (2013) incorpora algunos matices a lo expuesto. Como se recoge en el siguiente gráfico, la crisis económico-financiera ha seguido agravando de forma intensiva los niveles de pobreza de las personas sin discapacidad (19,4% en 2009 y 28,7% en 2013), en tanto se han estabilizado los de las personas con discapacidad (en torno al 25%). Al mismo tiempo, la situación de las personas con discapacidad (con y sin certificado de discapacidad) ha tendido a igualarse. Para entender estas dos tendencias se ha de recordar que, entre 2009 y 2013, se han mantenido, con recortes, algunas políticas de protección social como las ligadas a la Estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad (2008-12) o la LAPAD (Ley 39/2006).

**Gráfico 1. Porcentaje de pobreza relativa de las personas sin discapacidad, con discapacidad y de éstas con certificado de discapacidad (2007, 2009 y 2013)**



Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

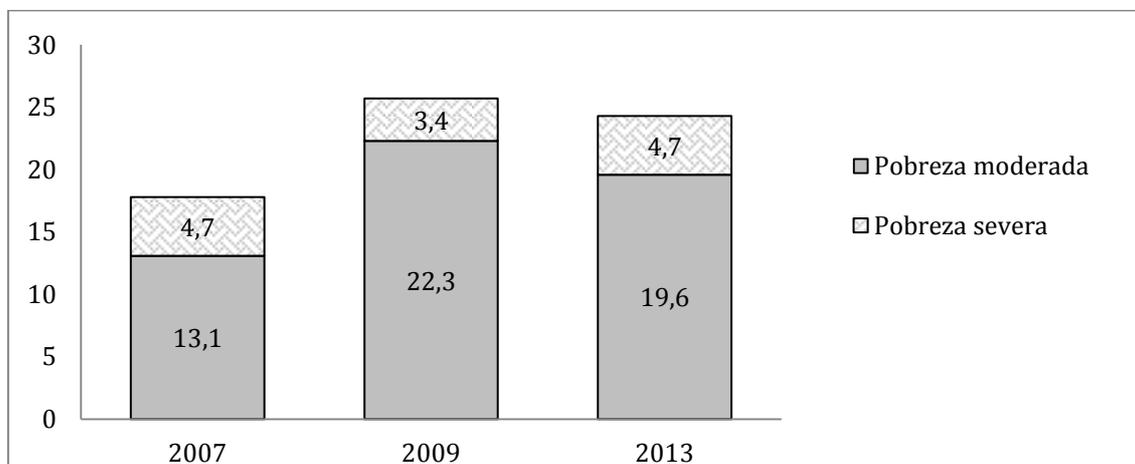
Dos datos a tener presente son la representación de las personas en situación de dependencia reconocida entre quienes dicen tener discapacidad (40,6%) y el incremento en la muestra de las personas con discapacidad y certificados de reconocimiento de la misma. En 2007 suponía el 60%, en 2009 el 53% y en 2013 el 80%. Por tanto, todo apunta a que ciertos mecanismos y prestaciones de protección como los reconocimientos de dependencia y/o discapacidad están amortiguando, que no reduciendo, la intensidad del creciente impacto de la situación de crisis actual.

Desagregando algo más la información anterior, en el gráfico siguiente se observa que la pobreza severa entre las personas con discapacidad se ha mantenido en niveles idénticos entre 2007 y 2013 (4,7%), mientras que en el conjunto de la población ha aumentado del 3,5% al 7,3%. Por su parte, registra un relevante incremento la pobreza moderada entre las personas con discapacidad. En 2009 se produjo un desplazamiento hacia la pobreza moderada, tanto desde las situaciones de no pobreza como de pobreza severa, dando como resultado un crecimiento global de la pobreza en las personas con discapacidad (del 17,8% en 2007 al 25,7% en 2009).

En 2013, la situación experimenta cambios mínimos, detectándose una muy ligera reducción global de la pobreza respecto al año 2009 (1,4 puntos), aunque aún se mantiene una diferencia de seis puntos y medio respecto al porcentaje de pobreza registrado antes de la crisis. En comparación con el conjunto de la población, la pobreza global en las personas con discapacidad sigue siendo 3 puntos porcentuales más elevada, a pesar del gran crecimiento experimentado desde antes de la crisis en la pobreza de la población española.

Estos datos vuelven a llamar la atención sobre las limitaciones de las prestaciones sociales, incluso las asociadas a los reconocimientos de dependencia y/o discapacidad, a la hora de paliar las situaciones más graves. No obstante, han ejercido su función paliativa desde el momento en que ha descendido el peso de las personas con discapacidad en situación de pobreza severa respecto del total de personas encuestadas: 7,7% en 2007, 8,7% en 2009 y 4,6% en 2013. Asimismo, han evitado mantener una progresión ascendente de los casos de pobreza moderada: 7,9% en 2007, 11,5% en 2009 y 6,8% en 2013.

**Gráfico 2. Distribución proporcional de personas con discapacidad atendiendo a su situación de pobreza (2007, 2009 y 2013)**

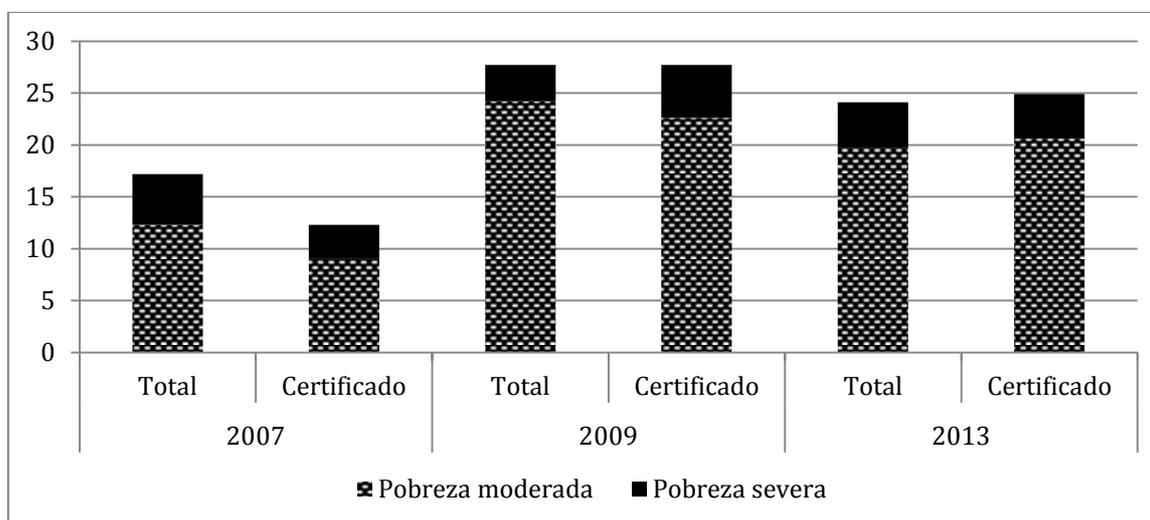


Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

La pobreza en los hogares con algún miembro con discapacidad ha seguido la misma tendencia que la descrita a título individual, si bien con una mayor representación de la incidencia de la pobreza respecto al conjunto de hogares. Así, en 2013, los hogares con alguna persona con discapacidad que se encontraban en situación de pobreza moderada eran el 18,3% del conjunto de hogares en esa misma situación, y el 14,1% entre los hogares en pobreza severa, en tanto las personas con discapacidad representaban el 6,8% y 4,6%, respectivamente, del conjunto de personas encuestadas.

Se confirma que la pobreza creció en los hogares con alguna persona con discapacidad, sobre todo, entre 2007 y 2009 y que las diferencias entre disponer o no de un certificado de discapacidad apenas son visibles en los hogares en situación de pobreza severa. De igual forma, se observa una suave mejoría entre 2009 y 2013, que se traduce en el paso del 27,7% de hogares con algún miembro con discapacidad en situación de pobreza en 2007 al 24,1% en 2013, básicamente, por la salida de la pobreza moderada (del 24,2% en 2009 al 19,7% en 2013).

**Gráfico 3. Porcentajes de niveles de pobreza de hogares con algún miembro con discapacidad (total) y aquellos que además cuentan con un certificado de discapacidad (2007, 2009 y 2013)**



Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

En suma, las personas con discapacidad y los hogares en los que residen siguen manteniendo altos niveles de pobreza, sobre todo moderada. Ciertamente, no ha empeorado tanto su situación en los últimos años de la crisis como la de quienes no tienen discapacidad, pero este hecho no puede ocultar que la incidencia sigue siendo mayor.

Es decir, la situación de estabilidad de la pobreza presentada, a pesar de la profundización de la crisis, resulta un tanto engañosa por lo expuesto hasta aquí. Otras aproximaciones realizadas al tema, como las de Huete (2013), corroboran esta conclusión, si bien lo hacen tomando como indicador el riesgo de pobreza de la población con discapacidad (el 48,4% se halla por encima de los límites de riesgo de pobreza).

## 4. La incidencia de la exclusión social: el espejismo de la estabilidad

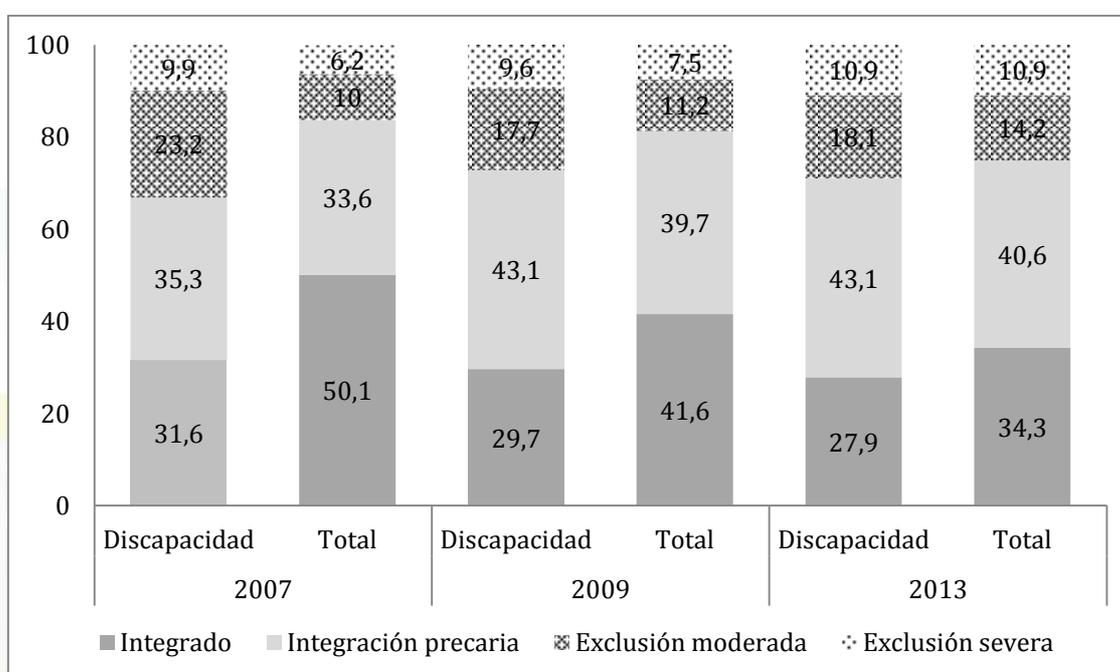
Durante el período analizado a través de las tres Encuestas FOESSA, no se observan cambios muy significativos en las situaciones de exclusión-integración que afectan a las personas con discapacidad y sus hogares. Entre 2007 y 2009, se observó un empeoramiento de casi ocho puntos en las situaciones de integración precaria, pero también una reducción de casi seis puntos en las de exclusión social. Comparando el año 2013, respecto al periodo anterior a la crisis (2007), se observa una pequeña reducción de 4 puntos porcentuales en el área global de la exclusión. Esta reducción se ha producido por el desplazamiento desde la exclusión moderada y desde la integración plena hacia la integración precaria, mientras que la exclusión severa incluso ha crecido en un punto. Por ello, las situaciones de integración se han reducido en casi cuatro puntos porcentuales.

En suma, podemos decir que en términos cuantitativos el espacio social de la exclusión de la población con discapacidad no parece haber aumentado (33% en 2007 y 29% en 2013). Lo que parecen trasladar los datos es un cierto estancamiento de la situación de la exclusión y la

integración moderada. Es decir, se consolida la precarización en torno al 43% y repunta la exclusión severa (9,9% en 2007 y 10,9% en 2013).

Esta imagen se completa al comparar la situación de las personas con discapacidad con la del conjunto de la población. Resulta significativa la evolución seguida por cuanto se ha producido una aproximación de los espacios de la exclusión entre la población en su conjunto y las personas con discapacidad, aunque todavía la exclusión afecte de forma más intensa a las personas con discapacidad. En comparación con el conjunto de la población, antes de la crisis, la distancia en el porcentaje de exclusión era prácticamente 17 puntos superior en las personas con discapacidad, mientras que en el año 2013 se ha reducido a 5 puntos. Sin embargo, este cambio no se ha producido por la reducción de la exclusión en las personas con discapacidad, sino por el espectacular aumento de la misma en el conjunto de la población.

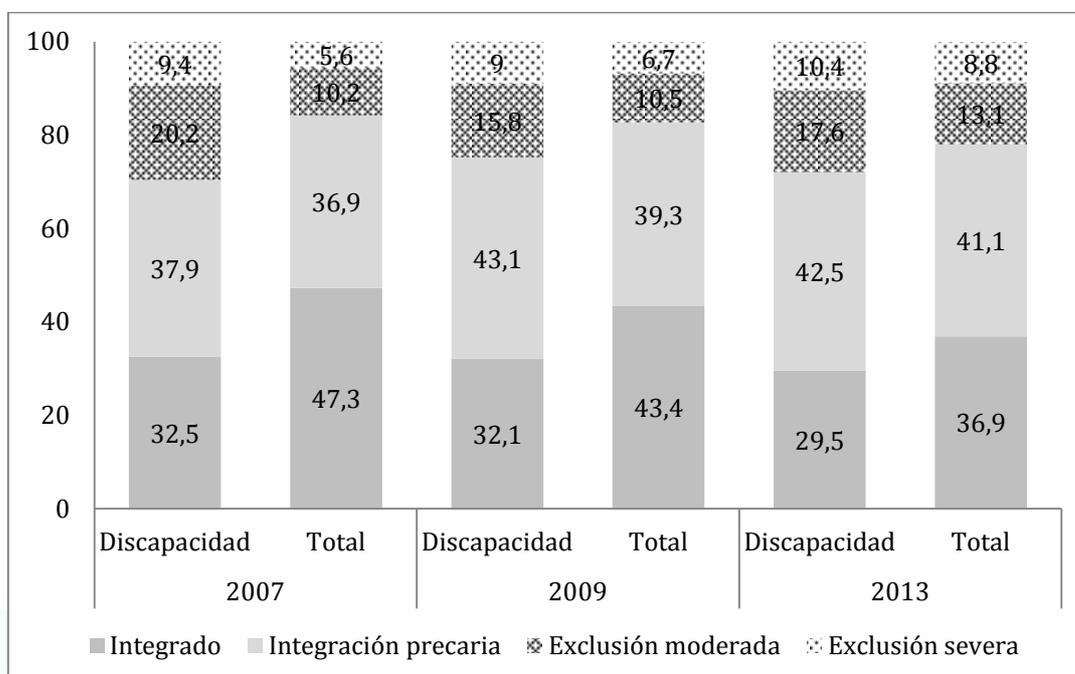
**Gráfico 4. Evolución de los niveles de integración social en la población española y en las personas con discapacidad (2007-2013)**



Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

La situación descrita puede hacerse extensible en sus grandes rasgos a la de los hogares. Puntualizando, entre el año 2007 y el 2013, se ha producido una ligera reducción en el porcentaje de hogares con algún miembros con discapacidad (1,6 puntos) situados en el ámbito de la exclusión (compensada y severa), mientras en la población general se incrementó en 6,1 puntos durante el mismo periodo. No obstante, y aunque la distancia se ha reducido desde el año 2007, en el año 2013 la incidencia de la exclusión en este tipo de hogares sigue siendo superior en 6 puntos a la detectada en la población general.

Gráfico 5. Evolución de los niveles de integración social en el conjunto de hogares y en los hogares con alguna persona con discapacidad (2007-2013)



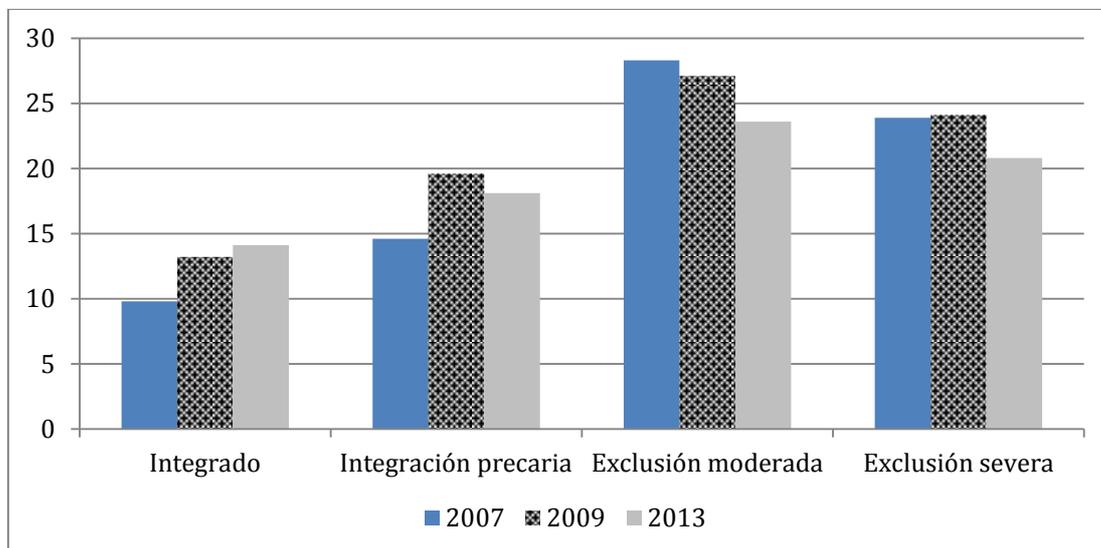
Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

La intensificación de los problemas de exclusión severa entre 2009 y 2013 ha conducido a que uno de cada diez hogares con algún miembro con discapacidad esté sufriendo una situación grave. La protección que podía dar el hogar para evitar situaciones de exclusión (2007-2009), parece reducirse en 2013 al aumentar los hogares en exclusión en los últimos años (24,8% en 2009; 28% en 2013).

Es importante remarcar que los hogares con alguna persona con discapacidad sufren de forma más intensa la exclusión social que el conjunto de hogares, aunque en los últimos seis años se haya producido una reducción de la distancia en la representación de la exclusión social. Reducción que no es efecto de un mayor nivel de integración de los hogares con algún miembro con discapacidad, sino de la agudización de las situaciones de exclusión de la población en su conjunto. Es decir, estas tendencias hablan de un ritmo más lento hacia la exclusión de estos hogares que de aquellos sin un miembro con discapacidad.

Como efecto de estos procesos, los hogares con algún miembro con discapacidad en situación de exclusión tienen un menor peso respecto del cómputo total de los hogares en el mismo ámbito de exclusión. Han pasado de ser el 28,3% del total de hogares en exclusión compensada en 2007 al 23,6% en 2013, y del 23,9% al 20,8% en el caso de la exclusión severa, respectivamente.

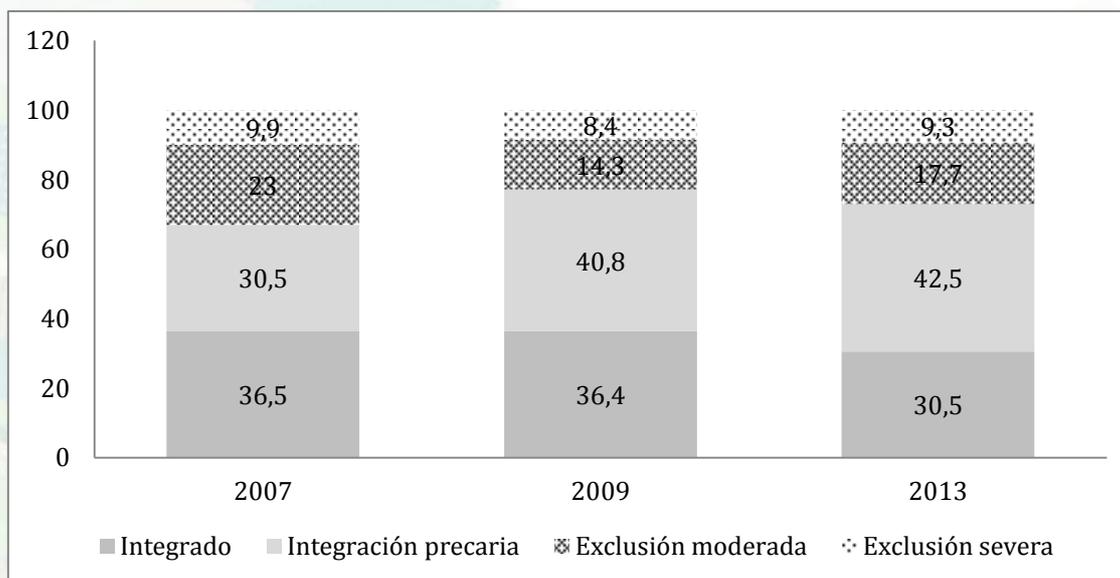
**Gráfico 6. Distribución proporcional de hogares con algún miembro con discapacidad en los espacios de la integración a la exclusión social respecto del conjunto de hogares en la misma situación (2007, 2009 y 2013)**



Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

Por su parte, disponer de certificado de discapacidad, como se ha apuntado en el apartado dedicado a la situación de pobreza, no impide que un hogar se encuentre en situación de exclusión. En el siguiente gráfico se comprueba el empeoramiento de la situación de estos hogares en 2013. Entre 2007 y 2009 se describió una mejoría en los hogares al desplazarse los casos del espacio de la exclusión social al de la integración precaria. Sin embargo, entre 2009 y 2013 ha aumentado la representación de la exclusión (22,7% en 2007 y 27% en 2013), a la vez que cae significativamente el ámbito de la integración (del 36% al 30,5% en 2013).

**Gráfico 7. Evolución de los niveles de integración social en los hogares con alguna persona con discapacidad que cuenta con certificado de discapacidad (2007-2013)**



Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

Este proceso resulta más preocupante al detenerse en la representación en la muestra de los hogares con algún miembro con certificado de discapacidad. En 2009, un 75% de los hogares estaba integrado o en integración precaria en tanto disponían de un certificado en un 53% de los mismos. Para un 73% de hogares en la misma situación, ha sido preciso que un 80% de esos hogares cuente con certificado de discapacidad en 2013. Este hecho cuestiona la efectividad de unas políticas que iban encaminadas a dar mayores apoyos a quienes se encontraban en una clara desventaja. La contracción de prestaciones públicas y la crisis del mercado de trabajo parecen haber desmontado el inicio del camino hacia una mayor integración social de las personas con discapacidad.

Por tanto, el empeoramiento de la situación de las personas con discapacidad y de los hogares con algún miembro con discapacidad no es tan acusado como en el caso de la población general. Siendo más estable su situación, la tendencia descrita durante los años de crisis es hacia la reducción de la integración, al tiempo que se incrementan las situaciones de exclusión severa y de integración precaria. En otros términos, se ha pasado de la extensión de la precariedad social (2007-2009) a la intensificación de los procesos de exclusión (2009-2013). Como resultado, la cronicidad de la exclusión ha dibujado un espejismo que la encubre.

## 5. Los ejes de la exclusión social en los hogares con alguna persona con discapacidad

La evolución seguida por las diferentes dimensiones de la exclusión en los hogares con algún miembro con discapacidad dibuja trayectorias diversas en los tres momentos en que se han elaborado las Encuestas FOESSA. Tan solo la exclusión de la política traza una continua línea ascendente. Más estabilidad es visible en la exclusión de la educación, vivienda, conflicto social y aislamiento social, tras un importante aumento entre 2007 y 2009. Solo marcan descensos paulatinos los ámbitos de consumo y salud.

**Tabla 2. Porcentaje de hogares con algún miembro con discapacidad respecto del total de hogares según la dimensión de exclusión social (2007-2013)**

	2007	2009	2013
Exclusión del empleo	12,6	19	16,2
Exclusión del consumo	22,6	21,7	15,9
Exclusión política	6,3	11,3	13,4
Exclusión de la educación	28,7	31,5	29,6
Exclusión de la vivienda	19,6	21,6	19,3
Exclusión de la salud	41,7	54,8	34,9
Conflicto social	17	27,9	24,9
Aislamiento social	13,5	15,7	15

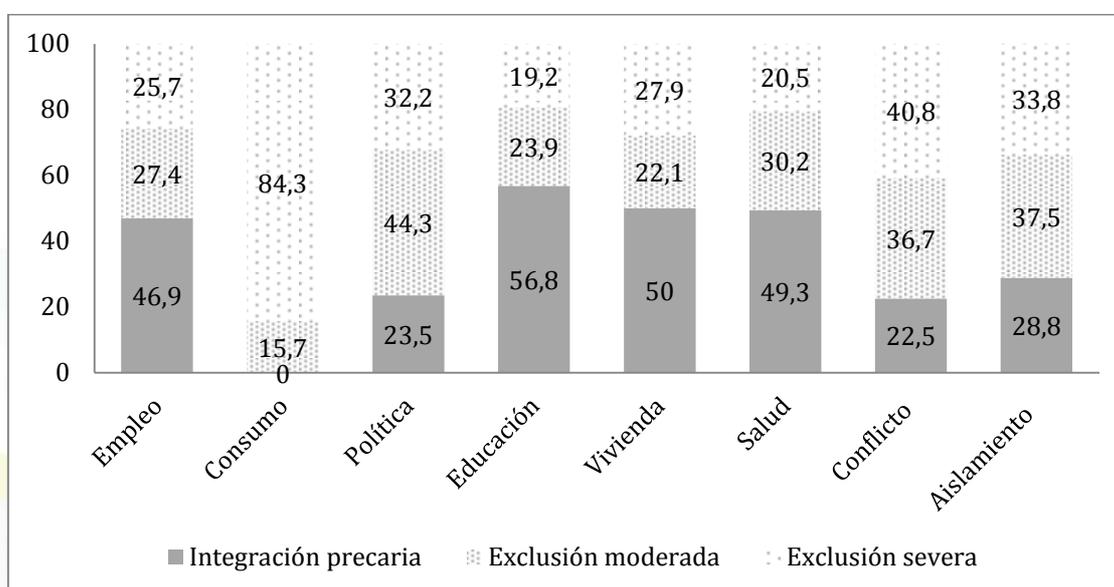
Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

Ahora bien, ha de llamarse la atención sobre la persistencia de los mayores porcentajes de exclusión en salud y educación respecto al conjunto de hogares, dos pilares fundamentales para potenciar la integración de los hogares con alguna persona con discapacidad. El conflicto social pasó a ser el tercer ámbito de exclusión respecto del total de hogares desde 2009, habiendo sido este puesto ocupado por la exclusión en el consumo (22,6%) en 2007. Por tanto,

un tercio de los hogares en situación de exclusión de la salud y educación, y uno de cada cuatro en conflicto social tienen algún miembro con discapacidad en 2013.

Por otro lado, los ámbitos de la exclusión social han afectado de forma diferente a las situaciones de integración precaria, exclusión compensada y exclusión severa. La exclusión en educación, vivienda, salud y empleo, por ese orden, son las dimensiones que han aportado más en la precarización de los hogares con algún miembro con discapacidad. En los hogares en exclusión compensada, los mayores déficits se concentran en las dimensiones de política, aislamiento social, conflicto social y salud. Los problemas del consumo, los conflictos sociales, el aislamiento y la vivienda, sobresalen en aquellos hogares afectados por la exclusión severa.

**Gráfico 8. Hogares con algún miembro con discapacidad, afectados por las dimensiones de la exclusión social en 2013 (% respecto de la dimensión de exclusión)**



Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

Hay que destacar, por tanto, que los déficits o problemas ligados al propio engranaje de los sistemas de protección social se convierten en factores desencadenantes de la pérdida de integración de los hogares con alguna persona con discapacidad. Sus fallos, en primera instancia, preparan el terreno para seguir la senda hacia la exclusión social. Estos ámbitos pierden protagonismo en las dos situaciones de exclusión, cuando las dificultades en la dimensión política, los conflictos sociales y el aislamiento social adquieren mayor protagonismo. Es también aquí y, sobre todo, en la exclusión severa, donde se hace visible la problemática del consumo, es decir, las dificultades para acceder a bienes considerados básicos y la pobreza extrema.

## 5.1. Indicadores políticos y sociales de la exclusión social

Al igual que sucede entre el conjunto de la población, la desconfianza respecto de la política es una realidad vivenciada en los hogares con alguna persona con discapacidad. Tanto en el año 2013 como en el año 2009 es más clara la falta de interés por participar en la toma de decisiones colectivas, en comparación con el periodo anterior a la crisis. Son los hogares en situación de exclusión compensada los que concentran (50%) el desinterés por cuanto rodea a los derechos políticos.

La exclusión de la educación ha experimentado cierta mejoría. En cuanto a los hogares con alguna persona analfabeta mayor de 65 años, se ha reducido su incidencia tanto respecto del conjunto de hogares en esa misma situación (42% en 2009 y 35% en 2013) como respecto del total de hogares con algún miembro con discapacidad (16,4% en 2007 y 9,4% en 2013). Lo mismo sucede al tomar el indicador que informa sobre la población de 16 a 64 años sin completar estudios. Respecto a los hogares con algún miembro con discapacidad, este indicador se ha desplazado del 6,7% en 2009 hacia el 4,4% en 2013. No se repite esta tendencia a la baja al comparar a estos hogares con el conjunto de hogares con algún miembro de 16 a 64 años que no ha completado estudios: 24,5% en 2009 y 27% en 2013.

Los datos de mejora apuntados pueden entenderse como los efectos de las acciones llevadas a cabo en materia de educación inclusiva en todos los niveles educativos y con la llegada de generaciones más formadas a edades superiores<sup>6</sup>. No obstante, sigue siendo preocupante la representación de hogares con algún miembro con discapacidad con una mínima formación, en particular cuando los datos no parecen apuntar hacia la inclusión educativa, sino al abandono a partir de los 16 años (finaliza la educación no obligatoria).

<sup>6</sup> Según el INE (2013), en 2012 el 65,8% de las personas de 65 y más años con discapacidad tenía estudios primarios o inferiores. En ese mismo nivel educativo se calcula el 23,6% de personas con discapacidad de 15 a 64 años, habiendo ya un 61,8% con estudios secundarios.

**Tabla 3. Incidencia de los indicadores del eje político de exclusión social en los hogares con algún miembro con discapacidad respecto del conjunto de hogares con persona con discapacidad<sup>7</sup>**

<b>EJE POLÍTICO: INDICADORES</b>	<b>2007</b>	<b>2009</b>	<b>2013</b>
<b>Derechos políticos</b>			
Derecho a elegir y ser elegido: extracomunitarios de 18 y más años sin convenio de reciprocidad	2,4	3,4	2
No participan en las elecciones por falta de interés, ni en entidades ciudadanas	3,9	10,1	8
<b>Derechos sociales: acceso a los sistemas de protección social</b>			
Menores de 3 a 15 años sin escolarizar	0,6	0,2	0,6
Sin completar estudios entre 16 y 64 años	6,7	7,9	4,4
Hogares con personas analfabetas de 65 años o más	16,4	13,3	9,4
Infravivienda: chabola, cueva, barracón, prefabricado o similar	0,2	0,7	1
Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc.	1,9	1,4	1,6
Insalubridad. humedades, suciedad, olores, etc.	11,3	13,1	11,7
Hacinamiento	6,8	4,1	3,6
Tenencia en precario de la vivienda: cedida, realquilada, etc.	4	1,6	1,3
Entorno muy degradado	0,6	0,9	2,1
Barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar	9,1	4,8	6,8
Gastos de la vivienda excesivos	6,1	4,6	9,1
Alguien sin cobertura sanitaria	0	0	0,2
Han pasado hambre en los últimos 10 años	3,2	3,3	4,6
Todos los adultos con problemas graves de salud y limitación de actividad diaria	16,9	18,3	14,7
Hogares con algún dependiente y sin recibir apoyo	6,6	5,1	7,1
Hogares con enfermos que no han usado los servicios sanitarios en un año	3,4	0,2	2,2
No compran medicinas, ni siguen tratamientos/dietas por problemas económicos	9,9	10,7	18,6

Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

Un dato relevante para la experiencia de la discapacidad hace referencia a la interacción con el entorno. La Encuesta de Integración Social y Salud (INE, 2013) recoge como barreras en la participación en las personas con discapacidad las limitaciones para salir de casa (81% de personas con discapacidad), para utilizar el transporte (54,6%) y para acceder a edificios (61,7%). Barreras de un entorno compartido que se suman a las de los entornos más próximos y particulares, como la vivienda.

Los indicadores referidos a la vivienda de la última encuesta FOESSA muestran un empeoramiento general de los hogares con algún miembro con discapacidad respecto al año 2009, aunque con una reducción del hacinamiento y la tenencia en precario. Asimismo, se ha detectado una creciente degradación del entorno (2,1%) y de la existencia de barreras arquitectónicas en el hogar (6,8%), por lo que se dificulta la interacción entre la persona con discapacidad y su escenario interrelacional. Similar comportamiento alcista se registra en cuanto a la infravivienda y las deficiencias graves en la construcción, aunque en estos indicadores con niveles similares a los del conjunto de hogares.

<sup>7</sup> La información de los hogares con algún miembro con discapacidad respecto del total de hogares en la misma dimensión ha quedado recogida en el anexo.

Ha podido constatarse, también, el aumento de hogares con algún miembro con discapacidad que tienen que hacer un esfuerzo económico importante para cubrir los gastos de la vivienda (4,6% en 2009 y 9,1% en 2013), ya que ello redundaría en un empobrecimiento de los mismos. Esfuerzo que ha de afectar a las condiciones de habitabilidad de los propios hogares. En este punto, el 11,7% de los hogares con alguna persona con discapacidad registra problemas de insalubridad, humedades, suciedad, olores, etc., en 2013.

Por tanto, el entorno residencial sigue describiendo una situación de vulnerabilidad de la calidad de la vivienda por deficiencias en su mantenimiento (deficiencias en la construcción, insalubridad, humedad y suciedad) y por la tipología de las mismas (infravivienda y tenencia en precario de la vivienda).

Los efectos de la exclusión social sobre la salud están siendo especialmente negativos. Si la comparativa se hace con el conjunto de hogares, solo se observa un empeoramiento respecto a 2009 en el caso de no disponer de cobertura sanitaria. Para el resto de indicadores la representación de los hogares con alguna persona con discapacidad ha descendido respecto a los hogares que sufren las mismas situaciones de exclusión en salud. No obstante, de los hogares que tienen a alguien enfermo y no han hecho uso de los servicios sanitarios, el 43,5% son hogares con un miembro con discapacidad y pasan del 20% cuando se habla de pasar hambre o no comprar medicamentos por problemas económicos. Es decir, los hogares con algún miembro con discapacidad son especialmente sensibles a cuanto rodea a la salud.

Del conjunto de hogares con algún miembro con discapacidad, por primera vez en 2013, hay hogares que tienen a alguien sin cobertura sanitaria (0,7%). Si bien se ha expuesto que no se ha producido un incremento de la pobreza en estos hogares en los últimos años, el empeoramiento de la situación en cuanto al acceso a los servicios sanitarios, la compra de medicamentos, el seguimiento de tratamientos, la opción de recibir apoyos y el haber pasado hambre, son indicadores de dificultades económicas en el hogar, aunque hayan disminuido los hogares con todos los adultos con problemas graves de salud (18,3% en 2009 y 14,7% en 2013). Especialmente significativo es el alto porcentaje de hogares que declaran no comprar medicinas ni seguir tratamientos por problemas económicos (18,6% frente a 9,9% en el periodo anterior a la crisis).

Al igual que ocurre con la exclusión en educación, los efectos de la exclusión en salud se hacen más evidentes a medio y largo plazo. Para un ámbito como la discapacidad, tales efectos tienden a ser visibles en un plazo más corto por la estrecha relación entre la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus hogares con la atención sanitaria.

De esta forma, todo indica que las últimas medidas adoptadas en materia sanitaria y farmacológica (copago) están teniendo efectos prácticamente inmediatos en los hogares con miembros con discapacidad, según se desprende de lo expuesto. No resulta inesperada, por ello, la valoración del estado de salud de las personas con discapacidad que presenta la Encuesta de Integración Social y Salud (INE, 2013): 17,5% dice tener buen o muy buen estado de salud (84,4% de las personas sin discapacidad) y un 34,7% un malo o muy malo estado (1,3% de las personas sin discapacidad).

Al adentrarse en el eje de las relaciones sociales, lo primero que se observa es que el panorama no mejora respecto a lo tratado en materia de derechos sociales y políticos. Es en las dimensiones de conflicto y aislamiento social donde se observa una mayor representación de los hogares con algún miembro con discapacidad respecto al conjunto de hogares que sufren exclusión en estos ámbitos. Así, uno de cada tres hogares con algún miembro con discapacidad declara que hay malas relaciones en la familia, malas relaciones vecinales o antecedentes penales en los últimos 10 años. Uno de cada cuatro indica malos tratos y

adicciones (alcohol, drogas o juego). El empeoramiento más importante, en términos comparativos, se ha centrado en el relativo a las malas relaciones en la familia<sup>8</sup>.

**Tabla 4. Incidencia de los indicadores del eje relaciones sociales de exclusión social en los hogares con algún miembro con discapacidad respecto del conjunto de hogares con persona con discapacidad**

RELACIONES SOCIALES: INDICADORES	2007	2009	2013
<b>Conflicto social, anomia</b>			
Malos tratos físicos o psicológicos en últimos 10 años	s.d.	3,2	3,7
Malas relaciones en la familia	1,6	1,1	1,4
Adicción al alcohol, las drogas o el juego	s.d.	6,6	3,5
Madre adolescente sin pareja	3,7	1	0,4
Antecedentes penales en últimos 10 años	4,1	2,2	1,4
<b>Aislamiento social</b>			
Hogares sin apoyo social	5,8	4	3,6
Malas relaciones con los vecinos	2,6	1,4	1,2
Personas en instituciones: penales, drogodependientes, etc.	0,2	s.d.	0,5

Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013

En la tabla anterior se aprecia, en conjunto, una situación de cierta estabilidad en los indicadores que recogen las relaciones sociales en los hogares con un miembro con discapacidad. Llama la atención la disminución de los hogares sin apoyo social<sup>9</sup> y de las adicciones. En el primer caso es probable que haya alguna relación con la concentración de prestaciones sociales en quienes registran los niveles máximos de dependencia y exclusión social.

Por el contrario, han aumentado levemente los malos tratos y muy levemente las malas relaciones en la familia. No es posible obviar en este punto que los hogares con alguna persona con discapacidad han sido, durante años, un colectivo invisible, con cierta autorregulación y muy volcado hacia la unidad familiar. Ello sigue generando una sobrecarga en todos los miembros del hogar no siempre atendida (J.J. Lacasta, 2010). Es así como la integración social de las personas con discapacidad pasa, necesariamente, por la integración del hogar y por apoyos para crear las condiciones de integración de la persona con discapacidad en ese hogar.

Las relaciones sociales, en suma, tampoco parecen haber empeorado especialmente en el transcurso de la crisis desde 2009. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que, como ya hemos referido, las situaciones de conflicto y aislamiento están más presentes en los hogares en los que vive alguna persona con discapacidad que en los que no están.

<sup>8</sup> Tienen alguna persona con discapacidad el 16% del total de hogares que afirman tener malas relaciones en 2007 y el 35% en 2013.

<sup>9</sup> Se entiende por personas sin apoyo social aquellas que carecen de relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o de dificultad.

## 5.2. Indicadores económicos de la exclusión social

La última información del INE (2013) sobre el empleo de las personas de 16 a 64 años con discapacidad muestra una situación que mantiene pautas previas poco alentadoras sobre los efectos reales de las propuestas dirigidas hacia una sociedad más inclusiva en uno de los terrenos clave para ello, el empleo. El 36,6% de las personas con discapacidad reconocida era considerada población activa en 2012, frente al 77% de la población sin discapacidad. Su tasa de empleo era del 24,5%, lo que significa mantener los más de 30 puntos de diferencia con respecto a las personas sin discapacidad, siendo su tasa de paro 8 puntos más. Es visible, desde el punto de vista laboral, la escasa participación de las personas con discapacidad.

**Tabla 5. Tasas de actividad, empleo y paro de las personas con y sin discapacidad entre 16 y 64 años (2009 y 2012)**

	Con discapacidad		Sin discapacidad	
	2009	2012	2009	2012
Tasa de actividad	36,2	36,6	75,4	77
Tasa de empleo	28,3	24,5	61,8	57,8
Tasa de paro	21,8	33,1	18,1	25

Fuente: INE (2013)

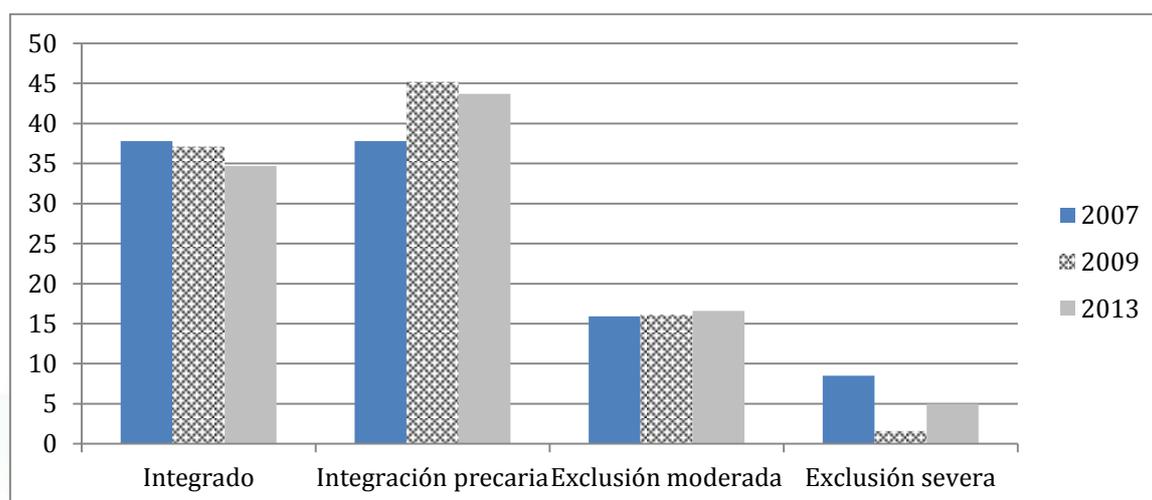
Comparando los dos años de referencia, llama la atención la fuerte subida de la tasa de paro de las personas con discapacidad (11 puntos), cuando la tasa de actividad se ha mantenido casi invariable y la de empleo ha descendido con una intensidad similar a la de las personas sin discapacidad (en torno a 4 puntos). Con las tasas indicadas, no cabe esperar un perfil laboral como el que resume esta misma fuente para la mayoría de trabajadores con discapacidad: asalariada, con contrato indefinido, jornada completa y empleada en el sector servicios. Un dato a tener en cuenta para entender esa tasa de paro que se ha incrementado de forma tan ostensible es la brecha de participación laboral por grupos de edad. Para el año 2012, el 66,6% tenía entre 16 y 24 años, el 37,3% entre 25 y 44 años, y el 27% de 45 a 64 años.

Una aproximación a esta realidad con los datos disponibles del FOESSA confirma la estabilidad de la tasa de actividad de las personas con discapacidad de 16 a 64 años entre 2007 y 2013 en torno al 31,5%. Entre la población activa que afirma tener discapacidad, están trabajando en torno al 62% en las dos últimas encuestas, si bien solo supone el 20% respecto del total de personas con discapacidad de 16 a 64 años en 2013.

Como se ha expuesto en páginas anteriores, contar o no con un certificado de discapacidad puede influir en el nivel de protección alcanzado en un momento de crisis y cambios sociales como el actual. Así se entendió con los datos disponibles para 2007 y 2009. En el caso de quienes tienen certificado de discapacidad, el porcentaje de los que han trabajado en 2013 es similar a 2007, pero se ha detectado mayor dinamismo en la búsqueda de empleo. Este comportamiento puede ser indicio de algunos cambios. En momentos sociales de bonanza, ha sido posible sostener en los hogares a las personas con discapacidad, incluso grave, sin que se considerase necesaria su incorporación al mercado laboral. Los cambios socioeconómicos recientes y la mayor precariedad a la que se hace referencia en otros capítulos de este Informe, han podido ser el impulso para que se busque empleo de forma más activa entre este colectivo.

Como es sabido, disponer de un empleo no es sinónimo de integración social plena. En la siguiente tabla se constata esta afirmación, ya que solo el 34,7% de las personas con discapacidad que trabajan en 2013 se hallarían en situación de integración. La tendencia que se describe desde 2007 no es tanto hacia la precarización de quienes cuentan con un empleo (del 2007 al 2009) como a aumentar la exclusión, sobre todo la severa.

**Gráfico 9. Distribución porcentual en los espacios de integración/exclusión de las personas con discapacidad que trabajan (2007, 2009 y 2013)**



Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

A pesar de este ligero empeoramiento de la situación de las personas con discapacidad que trabajan, son estas personas y quienes perciben alguna pensión o se dedican a labores del hogar las que se encuentran en un mayor nivel de integración en 2013. Integración que es especialmente precaria (más del 40%). En situación especialmente difícil se hallan quienes buscan empleo, ya que casi el 60% vive en situación de exclusión. Después de un repunte de la exclusión en 2009, se recuperan los niveles de 2007.

En ese proceso de búsqueda de empleo, un elemento a tener en cuenta es la inscripción en los servicios públicos de empleo. Resulta reseñable el elevado porcentaje de personas con discapacidad que no se inscriben en los servicios de empleo. Entre 2007 y 2013, solo el 20% de personas de 16 a 64 años con discapacidad estaban inscritas. Esta inscripción ha tendido a generalizarse entre quienes tienen certificado de discapacidad respecto del total de personas desempleadas, no así respecto del conjunto de personas con discapacidad sin certificado ya que apenas es superior.

Se produce un incremento de inscripción en el INEM, especialmente en el período 2009-2013, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Aunque también aumenta respecto a los años anteriores el número de personas que no están inscritas en los servicios de empleo. Es probable que se haya perdido la esperanza de encontrar un empleo adecuado. También puede ser un dato más de la invisibilidad de la discapacidad de la que se habla en el informe de la OMS (2011). Una de las claves en la búsqueda de empleo es contar con un entorno social en el que apoyarse, contactos que puedan transmitir las capacidades de una persona para ocupar un puesto de trabajo. En este punto, la Encuesta Social Europea recoge que resulta difícil disponer de redes en el entorno para un 72,53 % de la población con discapacidad (Huete, 2013).

En torno al 30% de las personas con discapacidad de las tres Encuestas FOESSA perciben una pensión de jubilación/prejubilación y al 20% tienen reconocida su incapacidad permanente. En estos casos, la integración afecta a algo más del 25% y la integración precaria al 46%, por tanto quienes perciben estas prestaciones se ven más protegidos contra la exclusión que quienes se hallan en otras situaciones, aunque ha aumentado la exclusión severa entre 2009 y 2013.

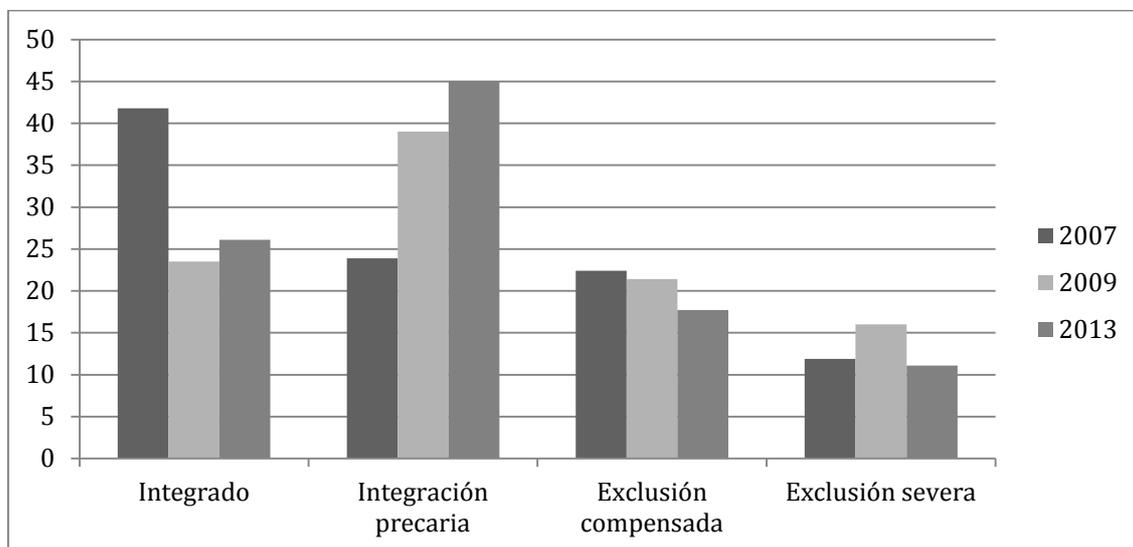
**Tabla 6. Distribución porcentual en los espacios de integración/exclusión según la ocupación de las personas con discapacidad mayores de 16 años (2013)**

	Integrado	Integración precaria	Exclusión compensada	Exclusión severa
Trabajando	34,7	43,7	16,6	5
Buscando empleo	3,5	38,6	28,9	28,9
Estudiante	55	35	5	5
Percibía alguna pensión/ ingresos prejubilación	26,7	46,3	18,9	8
Labores del hogar	31,1	42,2	18	8,7
Otras	33,9	36,1	13,1	16,9

Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

Por lo expuesto en el ámbito del empleo, encontramos cifras altas de individuos que no acceden al empleo y necesitan prestaciones para sostenerse y en el caso de quienes trabajan, se mantiene la estabilidad en su situación de exclusión. Como ya se ha mencionado al presentar los demás ejes de exclusión, la situación de las personas con discapacidad ha empeorado menos que la población sin discapacidad, por lo que puede dar la apariencia engañosa de que no es tan grave la crisis para este sector de población. Pero no se puede obviar que el punto de partida ya era más precario, y que la situación de invisibilidad y la falta de confianza, tanto en las posibilidades propias como la que puede transmitir el entorno, más bien proteccionista con las personas con discapacidad, pueden estar suponiendo un freno, junto con la falta de formación, para que se acceda al mercado laboral en igualdad de condiciones y con los apoyos que sean precisos en cada caso.

Lo expuesto incide directamente sobre la situación en la que se encuentran los hogares con algún miembro con discapacidad. En el caso de los hogares en los que el sustentador principal está sin empleo, se registró un aumento del desempleo entre 2007 y 2009 de 2 puntos porcentuales (del 3,5% al 5,6%), manteniéndose la tendencia, aunque con intensidad leve en 2013 (0,3 puntos de incremento). Algún matiz introduce el género del sustentador principal. Cuando el sustentador principal es varón, predomina la estabilidad en la situación de exclusión en las tres Encuestas. Se presenta más integración precaria que formas más graves de exclusión. En cambio, en el caso de las mujeres, destaca un desplazamiento desde la integración a la integración precaria, una cierta contracción de la exclusión moderada y, tras el repunte de 2009, una cierta estabilización de la exclusión severa.

**Gráfico 10: Evolución de la situación de exclusión cuando el sustentador principal del hogar con algún miembro con discapacidad es mujer**

Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

El panorama general que muestra la siguiente tabla en materia de empleo es, por tanto, de continuidad respecto a 2009, año que va a marcar un punto de inflexión hacia una mayor reducción de la presencia en la actividad laboral de las personas con discapacidad. Entre los hogares con alguna persona con discapacidad, los déficits más preocupantes, ya desde 2009, son los referidos a la falta de empleo: hogares con algún miembro parado y sin formación ocupacional (23,9%), y hogares con todos sus activos en paro (12,3% frente al 10,9% del total de la muestra).

**Tabla 7. Incidencia de los indicadores del eje económico de exclusión social en los hogares con algún miembro con discapacidad**

EJE ECONÓMICO: INDICADORES	2007	2009	2013
<b>Participación en la producción</b>			
Sustentador principal 12 meses o más parado y parado actualmente	3,5	5,6	5,9
Sustentador principal con un oficio de exclusión	0,8	1,7	1,4
Hogares con sustentador principal sin cobertura de la seguridad social	0,6	1,1	1,2
Hogares sin ocupados, sin pensiones ni prestaciones contributivas	8,8	s.d.	8,5
Hogares con algún parado y sin formación ocupacional	8,2	23,2	23,9
Todos los activos en paro	5,9	13,9	12,3
<b>Participación del producto social</b>			
Pobreza extrema	4,9	3,5	4,4
Carece de bienes básicos	s.d.	s.d.	2

Fuente: EINSFF 2007, 2009 y 2013.

Tomando el conjunto de indicadores utilizados dentro del eje económico de la exclusión social, uno de cada cinco hogares del total con carencia de bienes básicos, de aquellos que tienen a todos sus activos en paro y de los que no tienen a nadie ocupado, con pensión o prestación contributiva, son hogares con algún miembro con discapacidad. A pesar de esta importante representación en 2013, es significativamente menor que en 2007 (entre el 25% y el 35%). Este peso desciende hasta el 14% cuando se trata del sustentador principal en paro, los hogares están en situación de pobreza extrema y hay alguna persona parada y sin formación ocupacional. En cuanto al ámbito del consumo, la pobreza extrema ha vuelto a repuntar y se registra, como efecto del agravamiento de la exclusión, la carencia de bienes básicos.

Estos resultados van en la línea de lo expuesto hasta aquí sobre la diferente intensidad del impacto de la crisis en los últimos años entre la población sin y con discapacidad. Ahora bien, es preciso no olvidar que las personas con discapacidad y los hogares en los que residen experimentan las situaciones de exclusión de forma acumulativa (educación, vivienda, salud, relaciones sociales, etc.) y crónica.

La profundización de la crisis general apenas ha modificado el espacio de la exclusión ocupado por los hogares con algún miembro con discapacidad. La imagen de continuidad respecto a 2009, de estabilización de la situación, de no empeoramiento generalizado, no ha de interpretarse como una mejoría, sino más bien como un espejismo que puede confundir sobre una realidad todavía irresoluta. Incluso podría interpretarse como un efecto reflejo en la comparación con el empeoramiento de la situación de los hogares sin miembros con discapacidad.

## 6. Conclusiones

Desde un paradigma social de comprensión de la discapacidad, a lo largo de este capítulo se ha analizado el impacto que la crisis económico-financiera está teniendo en los procesos de inclusión-exclusión de las personas con discapacidad y sus hogares. Es decir, hasta qué punto el contexto está facilitando o dificultando que este colectivo pueda disponer de oportunidades adaptadas a sus necesidades y que faciliten el ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

En primer lugar, no se han producido grandes transformaciones en cuanto al impacto de la exclusión en la discapacidad. Sin embargo, que no se haya reducido y que su incidencia siga siendo superior respecto al conjunto de la población, ya es una noticia negativa en sí misma. Además, un análisis en detalle revela riesgos presentes en ese espejismo de estabilidad: leve reducción de la integración, a costa del incremento en la integración precaria y de un pequeño aumento de la exclusión severa.

En la dimensión económica, los hogares en los que hay alguna persona con discapacidad cuentan con menores ingresos económicos y con mayores gastos (fármacos, tratamientos, ayudas técnicas, etc.). De hecho, la pobreza (severa y moderada) se ha incrementado en 3 puntos respecto al periodo anterior a la crisis (2007).

En parte, la pobreza mencionada está relacionada con las bajas tasas de empleo existentes en este colectivo, y con la limitada capacidad integradora de las pensiones y de otras prestaciones. En situaciones como la actual en la que la población sin discapacidad se encuentra sin ingresos, sin forma de obtenerlos por el empleo, se puede considerar socialmente que tener una prestación es suficiente para sobrevivir y que no es preciso que estas personas con dificultades, tengan que acceder al empleo. Esto hace que una integración laboral, de por sí compleja, se convierta en una tarea más difícil aún para las personas con discapacidad. Siguiendo el modelo social de la discapacidad, el éxito en el acceso al empleo de este sector de población, y consecuentemente, su inclusión social, su autonomía, pasarán por las oportunidades sociales y por el aumento de la formación de estas personas, algo que aún no es una realidad, como se ha constatado en los datos presentados.

Respecto a la educación, la exclusión que sufren las personas con discapacidad en este ámbito tiene una clara influencia negativa en el acceso al empleo, pero también en otros relativos a la participación social. Aunque se han producido avances a partir de los esfuerzos desarrollados en el ámbito de la educación inclusiva y las nuevas generaciones cuentan con mayor preparación académica, los diferentes estudios siguen resaltando el inferior nivel de estudios detectado en este colectivo y las altas tasas de abandono escolar prematuro.

La vivienda, así como su entorno, forma parte de los derechos sociales básicos y, en el caso de la discapacidad, determina de manera muy relevante las posibilidades de interacción social. Por ello, debe ser motivo de preocupación la persistencia de barreras arquitectónicas o los problemas de insalubridad detectados en algunos hogares.

Los hogares en los que vive alguna persona con discapacidad están especialmente representados entre los hogares que sufren situaciones de exclusión en salud. Preocupantes son, en particular, los casos que declaran pasar hambre, que no pueden acceder a tratamientos por problemas económicos o que no pueden hacer uso de los servicios sanitarios.

También se observa una importante presencia de estos hogares entre aquellos que sufren situaciones de conflicto social y aislamiento social. La sobrecarga que sufren muchas de estas familias, que en ocasiones no cuentan con los suficientes apoyos sociales, puede estar detrás de una mayor presencia de conflictos familiares y de la aparición de situaciones de aislamiento.

Conviene tener en cuenta la persistencia de actitudes discriminatorias en la sociedad. Estas actitudes, desde luego, se convierten en un importante obstáculo para la plena participación social de las personas con discapacidad. Además, como una dificultad añadida, algunos estudios reflejan una escasa conciencia de discriminación en el propio colectivo.

La descripción de todas estas situaciones de exclusión que afectan a las personas con discapacidad y sus hogares, nos indica que el sistema actual de prestaciones técnicas, económicas y materiales está teniendo un efecto de protección del colectivo ante los efectos de la crisis. De hecho, mientras que la exclusión y la pobreza han experimentado un crecimiento dramático en el resto de la población, en el caso de la discapacidad la tendencia ha sido mucho más estable. Sin embargo, parece claro también que el sistema mencionado tiene importantes limitaciones en cuanto a su capacidad para modificar, realmente, los desequilibrios, la falta de accesibilidad, de los diferentes entornos en los que se desenvuelven las personas con discapacidad y sus hogares. En ese contexto, se observa cómo las personas con discapacidad y sus hogares han entendido el efecto protector que el sistema les podía aportar, con lo que se ha incrementado de manera notable el porcentaje de personas con certificado de discapacidad, instrumento que supone la “puerta de entrada” al sistema.

## 7. Anexos

### Distribución de las personas con discapacidad entre los 4 espacios de la integración a la exclusión según distintas características (2007, 2009 y 2013)

	2007				2009				2013			
	Integrado	Integración precaria	Exclusión compensada	Exclusión severa	Integrado	Integración precaria	Exclusión compensada	Exclusión severa	Integrado	Integración precaria	Exclusión compensada	Exclusión severa
Sexo												
Varón	28,5	41,6	21,7	8,2	28,3	46,6	16,9	8,2	28,2	41,0	19,2	11,6
Mujer	34,4	29,8	24,5	11,3	31,0	39,9	18,5	10,6	27,6	45,2	17,0	10,2
Grupos de edad												
Menos de 18 años	9,1	72,7	9,1	10,1	33,3	29,2	29,2	8,3	26,0	35,6	21,9	16,4
18-29 años	54,4	15,2	20,3	10,1	27,6	24,1	27,6	20,7	22,1	38,9	20,0	18,9
30-44 años	8,2	42,9	36,7	12,2	31,8	31,8	25,9	10,6	27,1	40,7	18,2	14,0
45-64 años	40,7	37,7	14,4	7,2	25,1	44,6	16,7	13,5	25,7	42,1	18,8	13,5
65-74 años	34,4	35,4	18,8	11,5	34,2	40,9	16,1	8,7	34,4	44,0	16,8	4,8
75 y más años	21,7	36,9	30,5	10,8	30,6	50,6	14,7	4,1	29,4	47,5	16,6	6,6
Estudios > 16 años												
Ni lee ni escribe	13,6	59,1	13,6	13,6	0,0	38,6	35,1	26,3	2,6	55,7	27,0	14,8
Inferior a Graduado Escolar o ESO	41,0	31,5	14,0	13,5	30,8	42,9	16,6	9,7	27,8	45,3	16,2	10,7
Graduado Escolar o en ESO, Bachiller elemental	28,8	34,6	30,1	6,5	32,8	41,1	17,8	8,3	30,1	39,2	18,2	12,5
BUP, FPI, FPPI, Bachiller LOGSE, o superior	56,9	11,1	29,2	2,8	41,0	49,2	8,2	1,6	33,7	39,7	20,2	6,3
Diplomado, licenciado o superior	8,5	61,7	25,5	4,3	39,5	52,6	7,9	0,0	40,5	39,2	10,1	10,1
Ocupación > 16 años												
Trabajando	37,8	37,8	15,9	8,5	37,1	45,2	16,1	1,6	34,7	43,7	16,6	5,0
Buscando empleo	0,0	40,0	40,0	20,0	0,0	14,6	46,3	39,0	3,5	38,6	28,9	28,9
Estudiante	0,0	0,0	0,0	100,0	22,2	77,8	0,0	0,0	55,0	35,0	5,0	5,0
Percibía alguna pensión/ingresos prejubilación	27,3	38,9	28,2	5,6	28,1	49,7	16,3	5,8	26,7	46,3	18,9	8,0
Labores del hogar	73,9	4,3	21,7	0,0	36,5	34,9	16,7	11,9	31,1	42,2	18,0	8,7
Otras	64,6	20,8	10,4	4,2	33,6	39,8	14,1	12,5	33,9	36,1	13,1	16,9
Tres grupos étnicos												
Españoles y UE15	33,4	34,8	22,4	9,4	30,6	43,1	17,7	8,6	28,6	44,3	17,9	9,2
Gitanos españoles	5,0	10,0	65,0	20,0	9,1	0,0	18,2	72,7	19,6	9,8	23,5	47,1
Extranjeros	0,0	86,7	0,0	13,3	0,0	68,8	18,8	12,5	8,8	32,4	17,6	41,2
Dos tipos de barrios												
Barrio en buenas condiciones	37,1	35,0	19,0	8,9	31,7	44,3	16,4	7,6	32,1	43,3	17,3	7,3
Barrio degradado, marginal	9,8	36,9	40,2	13,1	12,9	36,6	26,7	23,8	13,7	42,5	20,8	23,0
Tamaño de Municipio (habitantes)												
Más de 100.000	33,3	32,5	18,6	15,6	24,5	44,6	18,7	12,2	25,5	44,9	17,7	11,8
Entre 50.000 y 100.000	17,0	25,0	50,0	8,0	32,9	42,5	12,3	12,3	25,3	39,2	21,7	13,8
Entre 20.000 y 50.000	30,0	52,7	14,5	2,7	32,7	46,3	14,2	6,8	27,7	43,4	15,7	13,2
Entre 5.000 y 20.000	45,2	36,6	17,2	1,1	31,5	37,1	24,2	7,3	30,6	44,2	18,2	7,0
Menos de 5.000	31,5	30,1	21,9	16,4	36,7	42,2	14,4	6,7	37,6	38,0	18,5	5,9
<b>TOTAL</b>	<b>31,6</b>	<b>35,3</b>	<b>23,2</b>	<b>9,9</b>	<b>29,7</b>	<b>43,1</b>	<b>17,7</b>	<b>9,4</b>	<b>27,9</b>	<b>43,1</b>	<b>18,1</b>	<b>10,9</b>

Distribución de los hogares con algún miembro con discapacidad entre los 4 espacios de la integración a la exclusión según distintas características (2007, 2009 y 2013)

	2007				2009				2013			
	Integrado	Integración precaria	Exclusión compensada	Exclusión severa	Integrado	Integración precaria	Exclusión compensada	Exclusión severa	Integrado	Integración precaria	Exclusión compensada	Exclusión severa
Sexo sustentador principal												
Varón	28,9	43,2	19,6	8,2	35,5	44,7	13,7	6,1	31,3	41,1	17,5	10,1
Mujer	41,8	23,9	22,4	11,9	23,5	39,0	21,4	16,0	26,1	45,0	17,7	11,1
Grupos de edad												
Hasta 29	33,3	41,7	25,0	0,0	40,0	20,0	20,0	20,0	9,5	57,1	19,0	14,3
De 30 a 44	23,1	46,2	21,2	9,6	35,5	30,6	19,4	14,5	26,0	38,9	18,8	16,3
De 45 a 64	42,7	35,6	14,2	7,6	29,5	43,3	18,4	8,8	30,5	37,6	18,9	13,1
De 65 y más	23,5	38,9	25,8	11,8	33,3	45,9	13,2	7,5	30,3	48,0	15,8	5,8
Estudios sustentador												
Ni lee ni escribe	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	29,4	52,9	17,6	0,0	56,6	26,3	17,1
Inferior a Graduado Escolar o ESO	34,9	33,8	17,4	13,8	32,4	41,6	15,0	11,0	26,6	46,1	16,5	10,8
Graduado Escolar o en ESO, Bachiller elemental	45,5	31,5	21,8	1,2	29,9	47,9	15,0	7,2	30,2	39,5	17,9	12,5
BUP, FPI, FPII, Bachiller LOGSE, o superior	27,3	34,1	34,1	4,5	43,8	42,5	9,6	4,1	36,6	39,1	19,0	5,3
Diplomado, licenciado o superior	19,1	70,2	4,3	6,4	50,0	47,4	2,6	0,0	46,2	36,8	8,5	8,5
Ocupación sustentador principal												
Trabajando	46,7	34,4	15,0	3,9	38,4	45,9	11,6	4,1	36,7	44,1	13,6	5,5
Buscando empleo	0,0	14,8	70,4	14,8	0,0	15,9	38,6	45,5	0,0	14,0	39,5	46,5
Percibía pensión de jubilación/prejubilación	24,8	43,8	28,1	3,3	38,5	44,0	12,5	5,1	32,4	46,7	15,5	5,4
Otras	23,5	49,4	9,4	17,6	25,8	46,5	18,2	9,6	25,9	42,4	18,7	13,0
Nº miembros en el hogar												
Persona sola	3,5	66,3	20,9	9,3	11,2	61,2	14,3	13,3	10,5	55,2	24,6	9,7
De 2 a 4 miembros	40,7	31,1	19,7	8,6	38,5	39,3	15,0	7,2	35,0	40,7	15,3	9,1
5 y más miembros	6,7	50,0	23,3	20,0	14,5	41,9	25,8	17,7	17,2	33,6	24,6	24,6
Núcleos familiares												
Sin núcleo	4,4	58,9	27,8	8,9	13,2	56,1	14,9	15,8	13,0	55,3	21,5	10,2
Mononuclear	39,1	34,2	18,2	8,5	38,1	40,0	14,6	7,2	34,8	39,2	16,1	9,8
Polinuclear	11,1	11,1	33,3	44,4	15,2	43,5	30,4	10,9	16,8	42,6	22,8	17,8
Composición del hogar												
Hay núcleo monoparental	49,0	35,7	8,2	7,1	25,9	35,3	24,1	14,7	23,7	42,3	21,9	12,0
Hay algún anciano	24,5	42,8	22,4	10,3	34,4	44,8	14,2	6,6	31,8	46,5	16,4	5,4
Hay algún menor	49,4	31,5	12,4	6,7	25,9	41,1	18,8	14,3	21,1	38,6	21,5	18,8
Hay algún joven	31,9	26,4	25,0	16,7	22,2	40,0	22,2	15,6	28,9	36,8	18,8	15,4
Hay algún ocupado	47,4	34,0	13,4	5,3	42,0	40,0	14,8	3,2	36,5	42,3	16,2	4,9
Hay algún parado	0,0	19,6	67,4	13,0	0,8	43,6	35,3	20,3	3,3	46,0	27,3	23,5
Hay personas con discapacidad	35,2	35,4	20,9	8,5	29,1	44,2	17,4	9,4	29,5	42,4	17,6	10,4
<b>Total Hogares en situación de exclusión</b>	<b>32,5</b>	<b>38,2</b>	<b>20,2</b>	<b>9,2</b>	<b>32,1</b>	<b>43,1</b>	<b>15,8</b>	<b>9,0</b>	<b>29,5</b>	<b>42,5</b>	<b>17,6</b>	<b>10,4</b>

## 8. Bibliografía

- ALONSO PARREÑO, M<sup>a</sup> J., DE ARAOZ, I. (2011). *El impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad en la legislación educativa española*. Madrid: CERMI, Ediciones Cinca. Col. Convención ONU, nº6.
- ANAUT-BRAVO, S., ÁLVAREZ, M<sup>a</sup> J. et al. (2010). El impacto de la crisis económica sobre los hogares con personas con discapacidad. En Laparra, M., Navarro, M. L., & Eransus, B. P. *El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España* (Vol. 32). Madrid: Fundación FOESSA-Cáritas Española.
- ETXEBARRÍA MAULEÓN, X. (2008) *La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- BENACH, J., y MUNTANER, C. (coords.) (2010). *Empleo, trabajo y desigualdades en salud. Una visión global*. Barcelona: Icaria.
- COLECTIVO IOÉ (2012). *Discapacidades e inclusión social*. Barcelona: Obra Social "La Caixa", Colección Estudios Sociales, nº. 33.
- COMISIÓN SOBRE DETERMINANTES SOCIALES EN LA SALUD (CSDH) (2008). *Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
- HUETE GARCÍA, A. (2013). La exclusión de la población con discapacidad en España. Estudio específico a partir de la Encuesta Social Europea. *Revista Española de Discapacidad*, 1 (2): 7-24.
- HUETE GARCÍA, A. (2013a). *Pobreza y exclusión social de las mujeres con discapacidad en España*. Madrid: Ediciones Cinca-CERMI.
- INE (2014). *El salario de las personas con discapacidad. Explotación de la Encuesta Anual de Estructura Salarial y de la BEPD*. Notas de Prensa, 5 de junio de 2014. Madrid: INE.
- INE (2013). *El empleo de las personas con discapacidad. Explotación de la EPA y de la BEPD*. Notas de Prensa, 9 de diciembre de 2013. Madrid: INE.
- LACASTA, J. J. (2010). La inclusión como objetivo de los movimientos sociales de la discapacidad. En Pérez Bueno, L. C.: *Discapacidad, Tercer Sector e Inclusión Social. Estudios en homenaje a Paulino Azúa*. Madrid: Ediciones Cinca-CERMI.
- MALGESINI, G. (coord.) (2013). *Informe de la vulnerabilidad social 2011-2012*. Madrid: Cruz Roja Española.
- MARBÁN GALLEGU, V., MONTSERRAT CODORNÍU, J., MORÁN ALÁEZ, E., & RODRÍGUEZ CABRERO, G. (2012). *El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros. Análisis de la situación de la población con discapacidad y de las entidades del movimiento asociativo y aproximación a sus retos y necesidades en el horizonte de 2020*. Madrid: Ediciones Cinca-CERMI, Fundación ONCE. Col. CERMI nº 59.
- MARTÍNEZ RÍOS, B. (2013). Pobreza, discapacidad y derechos humanos. *Revista Española de Discapacidad*, 1 (1): 9-32.
- MARTÍNEZ RÍOS, B. (2011). *Pobreza, discapacidad y derechos humanos. Aproximación a los costes extraordinarios de la discapacidad y su contribución a la pobreza desde un enfoque basado en los derechos humanos*. Madrid: CERMI, Ediciones Cinca. Col. Convención ONU, nº 4.

- MEDINA, J. A., AGUILERA, J. C., DE LA FUENTES SANZ, L., POZA, A. M., & JÁUREGUI, A. O. (2012). *Trabajadores pobres y empobrecimiento en España*. Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria/Revista de servicios sociales, 52: 119-128.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2011). *World Report on Disability*. Ginebra: OMS-Banco Mundial.
- PALACIOS, A., ROMAÑACH, J. (2006). *El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional*. Santiago de Compostela: Ediciones Diversitas-AIES.
- RAYA DÍEZ, E., CAPARRÓS CIVERA, N., PEÑA CORREA, G. B. (2012). *Atención social a personas con discapacidad. Hacia un enfoque de Derechos Humanos*. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.
- WHITEHEAD, M., y DAHLGREN, G. (2006). *Concepts and principles for tackling social inequities in health*. Copenhagen: World Health Organization.



**FUNDACIÓN FOESSA**  
FOMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES  
Y DE SOCIOLOGIA APLICADA



***Caritas***